

Noboa contrata a Erik Prince y abraza el capitalismo mafioso que promueve Trump

ALERTA #03

Agosto, 2025

¿Qué es lo nuevo? El 18 de julio del 2025 Erik Prince llegó al Ecuador para iniciar su trabajo como contratista de seguridad para el gobierno de Daniel Noboa (EFE, 2025). En marzo, durante su primera visita al Ecuador, el presidente Noboa habló de una “alianza estratégica” con Prince para enfrentar al “narcoterrorismo” (Primicias, 2025). Luego, como parte de la campaña electoral, Prince participó en dos operativos antidelinquenciales en el suburbio de Guayaquil, junto a los ministros de Defensa y del Interior, reforzando la idea de que su trabajo como asesor de seguridad ya estaba en marcha (Verdezoto, 2025). Pero no fue cierto. Su contratación solo fue posible tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia que entró en vigor el 14 de julio. Esta ley permite el uso discrecional de “fondos especiales” para pagar a especuladores de la guerra como Prince, sin rendirle cuentas a nadie.

¿Por qué es importante? La sombría trayectoria de Erik Prince en más de 30 países donde ha realizado operaciones al servicio de regímenes oligárquicos y autoritarios en todo el mundo, lo cualifican como un operador del capitalismo mafioso; aquel que se promueve desde la administración Trump al unísono con los gobiernos de extrema-derecha en Europa y América Latina. En este contexto, la contratación de Erik Prince deja entrever tres escenarios probables para Ecuador: Primero, que su actuación se restrinja a un acompañamiento en el diseño táctico-operacional de un plan de guerra para el «Bloque de Seguridad» a cambio de millonarios honorarios, como lo hizo en varios países africanos durante años. Segundo, que reclute y constituya un ejército privado, “escuadrones de la muerte” o milicias paramilitares para ejecutar tácticas de “guerra sucia”, como lo hizo en Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Somalia y lo está haciendo en Haití. Tercero, que la presencia de Prince sea parte de un acuerdo más amplio de “minerales-por-seguridad” con la Administración Trump, como el que está en marcha en la República Democrática del Congo.

¿Qué debe hacerse? El gobierno nacional no tiene incentivos institucionales ni presión social para cambiar de postura. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones que hagan posible exigirle un giro de timón al gobierno. Por un lado, la Corte Constitucional debe acelerar el análisis de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, para declarar su inconstitucionalidad. Por otro, las organizaciones políticas, sociales y comunitarias deben adoptar estrategias de acción colectiva consistentes, con tácticas de lucha no violenta y un claro programa democrático para frenar la afrenta despótica de Daniel Noboa.

Erik Prince es un especulador de la guerra, el rostro visible de una industria multimillonaria al servicio del capitalismo mafioso.

Erik Dean Prince (nacido el 6 de junio de 1969 en Holland, Michigan, Estados Unidos) es heredero de una fortuna amasada en torno a un negocio de autopartes. Fue miembro de los Navy SEAL, la unidad de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, hasta 1996. En 1997 fundó su primera Empresa Militar y de Seguridad Privada: “Blackwater USA”, para satisfacer una nueva demanda de servicios mercenarios generada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos —también conocido como el Pentágono—, tras el fin de la «Guerra Fría».

El orden internacional de la «Guerra Fría» implicó una hipermilitarización estimulada por las hipótesis de conflicto entre los países pertenecientes a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y los del «Pacto de Varsovia». Pero con el fin de la «Guerra Fría», en 1989, el complejo industrial-militar buscó otras formas de canalizar sus intereses a través de la privatización de los conflictos armados. Una nueva ola de «guerras civiles» se expandieron rápidamente durante los años noventa del siglo anterior.

Con la desaparición de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) los halcones de Washington no podían involucrar a la Casa Blanca en conflictos extranjeros sin pagar un elevado costo político. Entonces, las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (o PMSC, por sus siglas en inglés: *Private Military and Security Companies*) se volvieron fundamentales para evitar el escrutinio público. La «Guerra contra el Terrorismo» declarada por George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 apuntalaron esta tendencia.

Los primeros contratos que obtuvo Blackwater fueron para intervenir en las guerras de Afganistán (2001) e Irak (2003). De inmediato, las “puertas giratorias” entre el Pentágono y Blackwater se activaron. Joseph Schmitz fue designado en 2002 como Inspector General del Pentágono, desde donde bloqueó las investigaciones de altos funcionarios de la administración Bush. Tras serias acusaciones de corrupción, que lo llevaron a testificar incluso ante el Congreso, dejó su cargo y se enroló como Jefe de Operaciones de Blackwater, en septiembre de 2005 (Miller, 2025). Otro caso emblemático es el de Cofer Black, coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado y director del Centro de Contraterrorismo de la CIA (Central de Inteligencia Americana), que en 2005 se convirtió en vicepresidente de Blackwater USA. Mientras que Prince, desde el 2004 colaboró con la CIA en operaciones encubiertas en Medio Oriente (Ciralsky, 2009).



Blackwater era símbolo de éxito del nuevo “modelo” de privatización de la violencia política en Occidente. Hasta que una masacre en la plaza de Nisour (Bagdad, Irak) puso en la picota a los personeros de la empresa. El 16 de septiembre de 2007, contratistas de Blackwater ejecutaron a 17 civiles y dejaron más de 20 heridos mientras escoltaban un convoy de la embajada de los Estados Unidos. La gravedad del suceso atrajo atención mediática y provocó algunas escaramuzas ante la justicia estadounidense.

Sin embargo, los negocios continuaron. En 2008, Blackwater renovó un contrato con el Departamento de Estado para proteger diplomáticos en Irak, por un valor aproximado de USD 300 millones. A continuación, cambió de nombre a la empresa y creó una serie de filiales para disfrazar de legitimidad sus operaciones. Ricky Chambers, un exagente del FBI que trabajó durante años para Erik Prince, dirigió un programa de entrenamiento de tropas afganas para *Paravant*, una filial de Blackwater. Para el 2011, el Pentágono contaba con un presupuesto de USD 3.000 millones para contratar empresas privadas y dar entrenamiento en tácticas de «guerra especial» a las agencias de seguridad estatales, a través del «*Defense Department’s Counter Narco-Terrorism Program, CNTPO*» (Ackerman, 2011).

Las fechorías cometidas en Afganistán e Irak sirvieron como carta de presentación para que otros regímenes despóticos contraten sus servicios. En 2010, Prince se trasladó a Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) y fundó la empresa *Reflex Responses* (R2), dedicada al entrenamiento y equipamiento de fuerzas especiales, con un capital inicial de USD 21 millones aportado por el gobierno emiratí. En 2011 la monarquía emiratí contrató a R2 para brindar apoyo operativo, planificación y entrenamiento a sus fuerzas armadas. Además, se vincularon contratos adicionales para la protección de reactores nucleares y servicios de ciberseguridad. Desde entonces la monarquía emiratí se convirtió en su principal aliado para promover sus intereses a escala global.

Erik Prince es un especulador de la guerra, el rostro visible de una industria multimillonaria al servicio del capitalismo mafioso: un esquema de acumulación basado en la violencia letal que tiene gran acogida entre las «oligarquías guerreras» de África y Medio Oriente y que hoy es promovido desde la Casa Blanca. En una reciente investigación de Llamas: Observatorio Ecuatoriano de Conflictos (2025) se identificaron 36 países en los que Erik Prince realizó operaciones y formuló propuestas audaces, entre 1997 y 2025. Hoy, Ecuador es uno de ellos.

¿Qué se puede esperar de la contratación de Erik Prince por parte del gobierno de Daniel Noboa?

El **primer escenario** probable es que la actuación de Erik Prince se restrinja a un acompañamiento en el diseño táctico-operacional de un plan de guerra para el «Bloque de Seguridad» a cambio de millonarios honorarios.

El gobierno de Daniel Noboa ha creado las condiciones para que esto sea factible al poner en vigor la nueva Ley Orgánica de Inteligencia. Esta ley permite el uso de “recursos especiales” sin rendición de cuentas (véase los artículos 13 y 14), algo imprescindible para este tipo de “asesoría”. Además, la ley flanquea la posibilidad de que agentes de inteligencia ecuatorianos saquen del país recursos económicos sin que ninguna autoridad pueda impedirlo, con el pretexto de estar destinados a la compra de software o hardware para operaciones de inteligencia o contrainteligencia (ver artículo 43). De esta manera, pueden pagar los servicios de Prince sin generar registro financiero y entregárselo directamente en Dubai, su epicentro empresarial.

En 2012, Erik Prince fundó Frontier Resource Group (FRG), una firma de inversión en África asociada con empresas chinas y con intereses en sectores estratégicos del continente. En 2013, Prince vendió FRG y se convirtió en presidente de su nueva empresa Frontier Services Group (FSG), con sede en China e inversiones del conglomerado estatal chino CITIC. Estaba aprovechando la voracidad china por recursos estratégicos en el África. Durante el siguiente lustro ofertó sus servicios a una decena de países africanos. En la mayoría concreto truculentos negocios mineros, como el obtenido en la República de Guinea para abastecer de bauxita a la empresa estatal china “Chalco”. Pero concretó escasos negocios en seguridad. Sin embargo, solo por “aconsejar” a los gobiernos sobre cómo pelar las guerras de nuevo tipo Prince ganó hasta USD 10 millones al cabo de cinco años (Cole, 2019).

El **segundo escenario** probable es más grave. La contratación de Erik Prince puede tener por objeto reclutar y constituir un ejército privado, la formación de “escuadrones de la muerte” o milicias paramilitares para ejecutar tácticas de “guerra sucia”, como lo hizo en Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Somalia y lo está haciendo en Haití.

La Ley de Solidaridad Nacional creó las condiciones institucionales para que un escenario así sea factible: un régimen jurídico especial para activar un “Estado de Guerra” al margen de la Constitución y la ley penal ordinaria.

En 2010, R2 firmó un contrato por USD 529 millones con el príncipe de Abu Dabi para crear una "Unidad de Élite Antiterrorista" con la misión de realizar operaciones especiales, proteger infraestructuras petroleras y contener protestas. Entre 2010 y 2014 empresas ligadas a Erik Prince junto con Mohammed Dahlan, consejero de la monarquía emiratí de origen palestino, intervinieron en Yemen apoyando fuerzas aliadas de E.A.U.; entrenaron y equiparon milicias paramilitares como la "Fuerza de Seguridad de Élite" para controlar yacimientos petroleros y precautelar determinados intereses económicos, en medio de la cruenta guerra civil yemení.

También en el 2011, Erik Prince financió y dirigió la empresa "Saracen International", que participó en un programa multimillonario para entrenar a 2.000 contratistas somalíes con el objetivo de frenar la piratería que amenazaba el transporte marítimo internacional y combatir insurgentes islamistas.

Pero el caso más aleccionador para Ecuador es lo que está sucediendo en Haití. El enclenque gobierno haitiano ha firmado un acuerdo con Prince para enfrentar y eliminar a los líderes de las pandillas que mantienen en zozobra a la población (Adams et al., 2025). En marzo de este año, Erik Prince empezó a reclutar exmilitares haitianos para cumplir tal propósito, ofreciendo utilizar drones y otras tecnologías de vanguardia. Aunque se desconocen los detalles de la contratación, con toda seguridad debe servir de referencia para lo que planea hacer en Ecuador.

El tercer escenario probable es que la contratación de Erik Prince sea parte de un acuerdo más amplio de “minerales-por-seguridad” con la Administración Trump, como el que está en marcha en la República Democrática del Congo (R.D.C).

El 2 de junio el gobierno ecuatoriano anunció la reapertura del catastro minero, empezando con la pequeña minería no metálica –el 16 de junio– hasta completar con la gran minería a finales del 2025. Además, anunció la creación



de una “tasa de fiscalización” para el sector minero que desafía las concesiones otorgadas y amenaza con revertirlas por incumplimiento. De forma complementaria, la Ley de Áreas Protegidas flanquea la delegación a la iniciativa privada del control de las zonas ecológicas más sensibles que colindan con las concesiones de la gran minería metálica. Por último, mediante decreto ejecutivo Nro. 60, del 24 de julio del 2025, el presidente Noboa fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Así las cosas, las condiciones de posibilidad para implementar un acuerdo de “minerales-por-seguridad” con la Administración Trump están dadas en Ecuador.

El capitalismo mafioso que se promueve desde la Casa Blanca ha creado incentivos perversos para los países más pobres. Una investigación de Global Witness, replicada por The Guardian, halló evidencia documental del nuevo mecanismo extorsivo creado por la Administración Trump para acceder y controlar recursos minerales críticos en los países más pobres del mundo. Los documentos muestran que en los últimos seis meses se firmaron contratos por USD 17 millones entre firmas de cabildeo vinculadas a Trump y algunos de los países menos desarrollados del mundo, que estaban entre los más altos receptores de la extinta USAID (Townsend, 2025).

El gobierno de la R.D.C. contrató a la empresa Ballard Partners por USD 1,2 millones para obtener apoyo humanitario o militar. Somalia y Yemen firmaron contratos con BGR Group por de USD 550.000 y USD 372.000, respectivamente, con el mismo propósito.

Según el reporte firmado por Mark Townsend (2025), otras naciones están ofreciendo acceso exclusivo a puertos, bases militares y tierras raras a cambio de apoyo de Estados Unidos. ¿Será Ecuador una de esas naciones? Lo que se conoce es que la Embajada de Ecuador en Washington firmó un contrato con la consultora Mercury Public Affairs LLC, el 5 de marzo de 2025, para “fortalecer la gestión político-diplomática con la nueva administración (en Washington) en materia migratoria, comercial y de seguridad”, por un monto de USD 165.000 (Noboa, 2025).

En abril de este año Reuters reportó que Erik Prince concretó un acuerdo con el gobierno de la R.D.C. para proteger su riqueza mineral y garantizar la recaudación tributaria sobre las concesionarias mineras en el Congo.

Previamente, la administración Trump llegó a un acuerdo de minerales-por-seguridad con el gobierno de la RDC y, según las fuentes consultadas por Reuters, Estados Unidos se apoyará en contratistas de seguridad como Prince para cumplir el acuerdo (Donati & Rolley, 2025).

No hay que olvidar que Prince fue rehabilitado por Donald Trump en su primer mandato. En 2017, Betsy DeVos, hermana de Erik Prince, fue nombrada Secretaria de Educación. En 2020, Trump indultó a los cuatro contratistas de Blackwater condenados por la masacre de Nisour, en Irak, ocurrida en 2007. Prince no solo aportó a las campañas presidenciales de Trump, está firmemente alineado con su agenda política y ha realizado el “trabajo sucio” al servicio de Trump en más de una ocasión.

Actualmente Haití, la República Democrática del Congo y Ecuador tienen en común la violencia criminal, su riqueza mineral y la presencia del mercenario estadounidense más famoso: Erik Prince. ¿Mera casualidad o parte de una política concertada por la administración Trump? Solo el tiempo lo dirá.

¿Qué debe hacerse?

El gobierno nacional no tiene incentivos institucionales ni presión social para cambiar de postura. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones que hagan posible exigirle un giro de timón al gobierno. Por un lado, la Corte Constitucional debe acelerar el análisis de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, para declarar su inconstitucionalidad. Por otro, las organizaciones políticas, sociales y comunitarias deben adoptar estrategias de acción colectiva consistentes, con tácticas de lucha no violenta y un claro programa democrático para frenar la afrenta despótica de Daniel Noboa.

TRABAJOS CITADOS

- Ackerman, S. (2011, November 22). Pentagon's War on Drugs Goes Mercenary. WIRED. <https://www.wired.com/2011/11/drug-war-mercenary/>
- Ciralsky, A. (2009, December 2). Tycoon, Contractor, Soldier, Spy. Vanity Fair. <https://www.vanityfair.com/news/2010/01/blackwater-201001?currentPage=1>
- Cole, M. (2019, May 3). The Complete Mercenary. How Erik Prince Used the Rise of Trump to Make an Improbable Comeback. The Intercept. <https://theintercept.com/2019/05/03/erik-prince-trump-uae-project-veritas/>
- Donati, Jessica, & Rolley, S. (2025, April 17). Exclusive: Trump supporter Prince reaches deal with Congo to help secure mineral wealth. Reuters. <https://www.reuters.com/world/trump-supporter-prince-reaches-deal-with-congo-help-secure-mineral-wealth-2025-04-17/>
- EFE. (2025, July 18). Erik Prince volvió a Ecuador tras ser contratado por el Gobierno para capacitaciones. Ecuavisa. <https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/erik-prince-regreso-ecuador-anuncio-gobierno-contratacion-capacitaciones-AH9786002>
- Llamas: Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. (2025). 35 países en los que Erik Prince ha ejecutado operaciones y presentado propuestas, entre 1997 y 2025. Ecuador en Llamas, En Cifras #06. <https://www.llamasuce.com/en-cifras>
- Mazzetti, M., & Schmitt, E. (2011, January 20). Blackwater Founder Said to Back Mercenaries. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2011/01/21/world/africa/21intel.html>
- Miller, C. (2025, September 25). The Scrutinizer Finds Himself Under Scrutiny. Los Angeles Times. www.latimes.com/archives/la-xpm-2005-sep-25-na-schmitz25-story.html
- Noboa, A. (2025, March 12). Ecuador contrata empresa de lobby en Washington para lograr una visita de Estado de Daniel Noboa a Donald Trump. Primicias. www.primicias.ec/politica/ecuador-gobierno-noboa-contrato-lobby-washington-trump-91610/
- Primicias. (2025, March 11). Gobierno se reunió con Erik Prince, fundador de Blackwater, para hablar la lucha contra el narcoterrorismo. Primicias. <https://www.primicias.ec/seguridad/gobierno-alianza-estrategica-erick-prince-blackwater-lucha-narcoterrorismo-ecuador-91536/>
- Townsend, M. (2025, July 10). Lobbyists linked to Donald Trump paid millions by world's poorest countries. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jul/10/lobbyists-linked-donald-trump-poorest-countries-mineral-resources-trade-deals-for-us-aid-military-support>
- Verdezoto, A. (2025, April 5). Erik Prince, fundador de Blackwater, ya está en Ecuador para ayudar en el combate al narcoterrorismo. Ecuavisa. <https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerza-extranjera-ecuador-para-combatir-el-narcoterrorismo-KN9078826>

PARA CITAR ESTA ALERTA

Córdova-Alarcón, Luis. *Noboa contrata a Erik Prince y abraza el capitalismo mafioso que promueve Trump*. Ecuador en Llamas, Alerta #03. Quito, Ecuador: LLAMAS: Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, Universidad Central del Ecuador, 02 de agosto de 2025. Disponible en: <https://www.llamasuce.com>

Autor:

Córdova-Alarcón, Luis C.
ORCID 0000-0001-9948-6992
lcordova@uce.edu.ec
Orden, Conflicto y Violencia.
LLAMAS. Universidad Central del Ecuador

Colaboradora:

Taípe, Melanie Fabiana.
ORCID 0009-0008-0996-7767
mel_fabiaana_@outlook.com
Orden, Conflicto y Violencia.
LLAMAS. Universidad Central del Ecuador

SOBRE EL PROYECTO

ECUADOR EN LLAMAS (<https://www.llamasuce.com/ecuador-en-llamas>) es una plataforma digital para observar y monitorear conflictos a escala nacional. Se trata de un esfuerzo multidisciplinario orientado a dimensionar la conflictividad del país, visualizarla de forma digital, analizar sus trayectorias históricas y ofrecer información confiable tanto a la comunidad científica nacional e internacional como a los tomadores de decisiones.

El análisis y monitoreo del Conflicto Armado Interno se lo realiza con el apoyo de Orden, Conflicto y Violencia – Programa de Investigación de la Universidad Central del Ecuador (<https://ordenconflictoyviolencia.org/>)

